

INFORME ASESORÍA EXTERNA SENADOR JUAN ANTONIO COLOMA

SEPTIEMBRE 2022

I. MINUTA PARA EL DEBATE EN PARTICULAR DEL PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, BOLETÍN N° 14.570-05

I.1 ANTECEDENTES DE TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA

- i) Fecha de ingreso:** 03 de septiembre de 2021
- ii) Iniciativa:** Mensaje
- iii) Cámara de origen:** Cámara de Diputados
- iv) Trámite constitucional:** Segundo trámite constitucional
- v) Trámite reglamentario:** Segundo trámite reglamentario, segundo informe de la Comisión de Hacienda.
- vi) Normas de quórum:** Tienen rango de ley orgánica constitucional, el numeral 1 del artículo 30º (el que modifica la Ley N° 20.950, que autoriza emisión y operación de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias) y los numerales 1 y 2 del artículo 31º del proyecto de ley (el que modifica la Ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central).

vii) Leyes relacionadas con la iniciativa:

- Código de Comercio
- Ley Nº 20.950, que autoriza emisión y operación de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias.
- Ley Nº 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
- Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores.
- Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas.
- Ley Nº 20.712 que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales.
- Ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
- DFL Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indica.
- Ley Nº 20.009, que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.
- Ley Nº 21.236 que regula la portabilidad financiera.
- DFL Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio.
- Ley Nº 18.876 que sobre entidades privadas de depósito y custodia de valores.
- Ley Nº 19.220 que regula el establecimiento de bolsas de productos.
- DL Nº 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.
- Ley Nº 10.336, que regula la organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por decreto Nº 2421, de 1964, del Ministerio de Hacienda.

- Ley N° 21.314 que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica.

viii) Informe financiero: de conformidad al informe financiero N° 112/01.09.2021, el proyecto de ley implica un mayor gasto fiscal durante el primer año vigencia de \$1.200.144 miles, mientras que en régimen (a contar del segundo año de vigencia) el mayor costo se fija en \$1.044.691 miles, que se desglosan de la siguiente forma:

**Tabla 1: Gasto Incremental del Proyecto de Ley
(Miles de Pesos del 2021)**

Resumen Gasto por Subtítulo	1° año	2° año y en régimen
Subtítulo 21	924.037	924.037
Subtítulo 22	101.371	120.924
Gastos Generales (1)	30.906	30.906
Servicios tecnológicos	70.465	90.018
Subtítulo 29	174.736	
Habilitación oficina	174.736	
Total	1.200.144	1.044.961

(1) Gastos en arriendo de computadores e impresoras

Los mayores gastos que implica esta iniciativa se estiman en razón de que se deberán reforzar las unidades encargadas de las tareas de regulación, supervisión y sanción de las nuevas entidades, lo que también considera la conformación de nuevas unidades y el desarrollo de sistemas de apoyo para el cumplimiento de las nuevas funciones y atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero.

Entre las adecuaciones se considera aumentar la dotación de esta entidad en 17 funcionarios, que explica los mayores gastos del Subtítulo 21 (\$924.037 miles anuales) y gastos corriente anuales por \$30.906 miles anuales. Además, se consideran mayores gastos durante el primer año para la habilitación de

oficinas con un costo estimado en \$174.736 miles, y de servicios tecnológicos que el primer año se estiman en \$70.465 miles y en régimen alcanzan \$90.018 miles, y que corresponden a recursos para apoyo y mantención tecnológica, de registros etc.

El mayor gasto fiscal durante el primer año de vigencia de la iniciativa se solventará con cargo al presupuesto de la Comisión para el Mercado Financiero y del Tesoro Público, en lo que no fuere posible cubrir con el presupuesto de la Comisión.

ix) Votaciones:

- *Primer informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (noviembre 2021):*
 - 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
 - Votaron a favor: M. Díaz, P. Lorenzini, C. Mellado, J.M. Ortiz, L. Pérez, G. Ramírez, M. Schilling y G. Von Mühlenbrock.
- *Sala de la Cámara de Diputados (noviembre 2021):*
 - 129 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones.
 - Votó por la abstención: J. Mulet.
- *Primer informe de la Comisión de Hacienda del Senado (abril 2022):*
 - 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
 - Votaron a favor: J.A. Coloma, J. García, F. Kast, R. Lagos, D. Núñez.
- *Sala del Senado (mayo 2022):*
 - 44 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.
 - Votaron por la afirmativa: I. Allende, C.G. Aravena, P. Araya, K. Bianchi, J.L. Castro, F. Chahuán, J.A. Coloma, L. Cruz-Coke, A. De Urresti, J.M. Durana, L.

Ebensperger, R. Edwards, A. Elizalde, F. Espinoza, I. Flores, S. Gahona, R. Galilea, J. García, M.J. Gatica, F. Huenchumilla, J.M. Insulza, F. Kast, S. Keitel, A. Kusanovic, C. Kuschel, R. Lagos, J.I. Latorre, J. Macaya, I. Moreira, D. Núñez, X. Órdenes, M.J. Ossandón, R. Prohens, Y. Provoste, K. Pugh, J. Quintana, X. Rincón, G. Saavedra, D. Sandoval, G. Sanhueza, E. Van Rysselberghe, E. Velásquez, M. Walker.

- Votaron por la abstención: C. Pascual, A. Sepúlveda
- *Segundo informe de la Comisión de Hacienda del Senado (septiembre 2022):*
 - En particular: aprobado con modificaciones, con acuerdos tomados por la unanimidad de los senadores presentes, con excepción de lo siguiente:
 - Indicación 25: cuya redacción original (antigüedad del historial y transacciones máximo de 180 días) se rechazó por 4 votos en contra y 1 a favor (J.A. Coloma). Se aprobó una redacción alternativa (antigüedad del historial y transacciones máximo de 5 años) por 3 votos a favor, 1 en contra (J.A. Coloma) y 1 abstención ((J. García).

I.2 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El proyecto de ley está conformado de 46 artículos permanentes, que se distribuyen en 5 títulos, y nueve artículos transitorios. El contenido de la iniciativa se resume de la siguiente forma:

i) Título I. Disposiciones Generales (artículo 1º)

Se definen los principios y objetivo de la ley, el que apunta a establecer un marco general para incentivar la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos, bajo los principios de inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, adecuado resguardo de los datos tratados, preservación de la integridad y estabilidad financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y del terrorismo.

ii) Título II. Servicios financieros basados en tecnología (artículos 2º al 15º)

Se definen los servicios cuya comercialización será regulada por la presente ley:

- a) Plataformas de financiamiento colectivo.
- b) Sistemas alternativos de transacción.
- c) Asesoría crediticia y de inversión.
- d) Custodia de instrumentos financieros.
- e) Enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros.

Se radica en la Comisión para el Mercado Financiero el deber de fiscalizar la prestación de dichos servicios mediante las atribuciones que se le confieren en esta iniciativa y las contenidas en su ley orgánica.

Se establecen las definiciones necesarias para una mejor aplicación de la regulación, como Fintec, asesoría crediticia, asesoría de inversión, activos financieros virtuales o criptoactivos, enrutamiento de órdenes, plataforma de financiamiento colectivo, entre otras.

Se establece que dentro de las atribuciones normativas de la Comisión de Mercado Financiero se podrán establecer excepciones en el cumplimiento de requisitos o exigencias a entidades que por su naturaleza no comprometan la fe pública o estabilidad financiera de acuerdo a los parámetros fijados en norma general (asimetría normativa), salvo en materias que correspondan al tratamiento de datos personales.

Se establecen los servicios regulados que deberán inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros que administra la Comisión para el Mercado Financiero y los requisitos a exigir, definiendo que sólo podrán hacerlo las entidades que se dediquen de forma profesional a prestar los servicios financieros regulados por esta ley. Además, se establecen las entidades que no requerirán estar inscritas en este registro para prestar los servicios señalados, por estar fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero mediante otras normas, como bancos, clasificadoras de riesgo, corredores de productos, etc.

Se establece el proceso y los requisitos a cumplir para autorizar la prestación de servicios financieros regulados por esta normativa.

Se determinan las obligaciones de información que deben cumplir las entidades reguladas por esta ley, incluyendo el deber de informar determinadas transacciones al Servicio de Impuestos Internos.

Se fijan los rangos de garantías y patrimonio mínimo necesarios para el funcionamiento de las entidades, así como las condiciones de gobierno corporativo y gestión de riesgo que deberán tener.

Se establecen las infracciones graves y los agravantes que contempla la norma y las causales de cancelación del registro.

iii) Título III. Del sistema de finanzas abiertas (artículos 16º al 27º)

Se definen las reglas y principios básicos para la instauración de un Sistema de Finanzas Abiertas que promueva la competencia, innovación e inclusión en los servicios financieros, especialmente a través del acceso, intercambio, conectividad e interoperabilidad de datos e información que los clientes financieros autoricen expresamente compartir.

Se establece que las entidades que participen del Sistema de Finanzas Abiertas deberán hacerlo bajo los principios de proporcionalidad, calidad, transparencia e información al cliente, seguridad y privacidad de los datos, trato no discriminatorio e interoperabilidad entre instituciones participantes.

Se define que las entidades que participen del Sistema de Finanzas Abiertas serán aquellas que califiquen como (i) instituciones proveedoras de información, (ii) instituciones proveedoras de servicios basados en información, (iii) instituciones proveedoras de cuentas y (iv) proveedores de servicios de iniciación de pago, definiendo a qué entidades corresponde cada caso y cuál es la información y en qué condiciones deberá ser dispuesta para el Sistema de Finanzas Abiertas.

Se fija que la entrega e intercambio de la información definida en la ley deberá efectuarse por medio de una o más interfaces, de acceso remoto y automatizado que deberán mantener disponible los participantes del Sistema de Finanzas Abiertas, cuyos estándares mínimos determinará la Comisión mediante norma de carácter general, incluyendo la seguridad de la información, la ciberseguridad, el consentimiento requerido, las responsabilidades de las entidades participantes, la distribución de costos, trato no discriminatorio y las facultades de supervisión y fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

iv) Título IV. Otras disposiciones (artículos 28º al 29º)

Se establecen normas relativas a ofertas de productos financieros acorde al perfil de los clientes, así como las condiciones de acceso a cuentas bancarias por instituciones financieras fiscalizadas.

v) Título V. Modificaciones a otros cuerpos normativos (artículos 30º al 46º)

Se introducen modificaciones a las siguientes normas: (i) Ley Nº 20.950 que autoriza emisión y operación de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias; (ii) Ley Nº 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile; (iii) Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores; (iv) Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas; (v) al Código de Comercio; (vi) Ley Nº 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales; (vii) Ley Nº 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; (viii) DFL Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos; (ix) Ley Nº 20.009 que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones

electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude; (x) Ley Nº 21.236 que regula la Portabilidad Financiera; (xi) DFL Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre compañías de seguros; (xii) Ley Nº 18.876 que establece el marco legal para la constitución y operación de Entidades Privadas de Depósito y Custodia de Valores; (xiii) Ley Nº 19.220 que regula establecimiento de Bolsas de Productos; (xiv) DL Nº 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero; (xv) Ley Nº 10.336, que regula la organización y atribuciones de la Contraloría General de la República; (xvi) Ley Nº 21.314 que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica; (xvii) Ley Nº 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el DFL Nº 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

vi) Artículos transitorios

El primero establece la entrada en vigencia de la ley y del plazo máximo de 18 meses para la dictación de normas generales de la Comisión para el Mercado Financiero.

El segundo establece el plazo para el registro y solicitud de autorización para las entidades que actualmente presten los servicios regulados por esta ley.

El tercero establece el plazo de 18 meses para la dictación de la normativa para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas y la gradualidad de dicha implementación, estableciendo un plazo máximo de 36 meses para que entre en vigencia la totalidad de las normas relativas a esta ley.

El cuarto establece plazo de 12 meses para registrarse a las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y con consentimiento del cliente se encuentren prestando los servicios de iniciación de pagos o servicios basados en el acceso a información financiera de clientes.

El quinto define la obligación para el Ministerio de Hacienda durante los primeros 5 años de vigencia de la ley de elaborar un informe sobre los efectos de aplicación de esta normativa en los mercados correspondientes y su impacto en la competencia, innovación e inclusión de los servicios financieros, el que deberá enviarse cada año a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado.

El artículo sexto establece las normas de aplicación de las infracciones una vez entre en vigencia la ley para los delitos cometidos antes de ello o perpetrados durante su entrada en vigencia.

El séptimo establece el financiamiento de los mayores gastos que implique la ley durante su primer año presupuestario.

El octavo establece un aumento de la dotación máxima de la CMF en 17 cupos.

El artículo noveno establece una definición transitoria de las conductas que se considerarán infracciones gravísimas respecto de las obligaciones de protección de datos, la que se aplicara mientras la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, no defina un catálogo para conductas de igual gravedad.

I.3 COMENTARIOS EN GENERAL SOBRE LA INICIATIVA

Esta es una iniciativa que apunta positivamente al desarrollo y modernización del mercado de finanzas en Chile y atiende una necesidad urgente, puesto que viene a regular servicios que actualmente están operando en el país, pero sin que tengan un marco normativo para su control y fiscalización.

Los servicios que ofrecen las Fintec han aportado a la innovación del mercado de las finanzas mediante nuevas soluciones, mecanismos y productos que pueden llegar a más personas que las que hoy acceden al mercado financiero tradicional, aumentando las oportunidades de emprendimiento, ahorro e inversión.

En particular, la iniciativa se divide en dos grandes temas: la definición del marco regulatorio para las actividades Fintec y, en segundo lugar, el establecimiento de un sistema de finanzas abiertas.

Respecto al marco regulatorio, el proyecto apunta de manera adecuada al reconocimiento, regulación y fiscalización de las Fintec, lo que permite incorporarlas plenamente al mercado financiero del país, a la vez que se generan las condiciones pertinentes para que las personas accedan a ellas con seguridad y protección de sus derechos.

Respecto al establecimiento de finanzas abiertas, la tendencia mundial es que los mercados financieros promuevan la competencia, la diversificación de productos y la ampliación de oportunidades para la mayor cantidad de personas, de modo que los productos financieros entreguen ofertas diversas, de menor costo y respondiendo a las distintas necesidades que puedan tener los clientes según sus características particulares.

Para ello es necesario que se implementen conceptos y criterios de finanzas abiertas, que reconozcan la propiedad de las personas sobre su información financiera y permitan su implementación responsable, segura y facilitadora, eliminando la burocracia o barreras innecesarias, para que la modernización del mercado de finanzas sea efectiva y permita realmente a las personas acceder libremente a los distintos proveedores según sus propias necesidades y exigencias.

I.4 PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO EN LA DISCUSIÓN EN PARTICULAR

El proyecto fue objeto de cerca de 60 indicaciones, la mayoría de las cuales estaban referidas a las normas que establecen y regulan el sistema de finanzas abiertas, por ser ésta la materia que concentró el mayor debate de la Comisión de Hacienda dados sus efectos en la propiedad de la información, el tratamiento de datos personales, la seguridad de la información, el consentimiento de los clientes, los derechos de los consumidores y la ciberseguridad de los sistemas.

Respecto a las principales modificaciones introducidas al proyecto de ley en su tramitación en particular en la Comisión de Hacienda se destacan las siguientes:

a) Denominación y definición de Fintec:

Se estableció la denominación castellanizada de “Fintec” (“Fintech” es un anglicismo, abreviación del “Financial Technology”).

Se agregó la definición de Fintec, (artículo 3º) que no existía en el proyecto, para establecer normativa y jurídicamente qué es lo que se entenderá por ello y facilitar el tratamiento futuro que otras normas puedan dar a este sector, ya sea para regulación, tributación, beneficios, etc.

La definición se hizo en base a tres criterios: (1) se hace referencia a la actividad y no a la entidad, en razón de qué se hace y no de quién lo hace, (2) se definen los medios mediante los cuales se realiza la actividad y (3) se precisa el tipo de actividades que quedarán incluidas. Así, Fintec son las actividades que impliquen el uso y aplicación de

la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros.

b) Domicilio en Chile

Se estableció expresamente que las entidades que presten servicios Fintec deben tener domicilio en Chile, lo que facilita su fiscalización y su tratamiento administrativo, jurídico, penal y tributario (artículo 5º)

c) Financiamiento narcotráfico y terrorismo

Se incluyeron referencias relativas a la prevención del financiamiento del narcotráfico y el terrorismo como principios de esta normativa, lo que es importante aplicar en toda actividad financiera como criterio de atención y resguardo en el manejo de recursos de origen y/o con destino ilícito, tal como se hace en el mercado financiero tradicional (artículo 1º)

Asimismo, se aumentaron las restricciones de inscripción en el registro de la CMF para realizar actividades Fintec a aquellas entidades sancionadas por delitos de lavado y blanqueo de activos o uso de bienes de origen ilícito, incluidos aquellos relacionados al narcotráfico y el terrorismo, o bien que uno de sus socios principales, directores o administradores fueran sancionados o condenados por dichas conductas, con lo cual se está dando una señal adecuada de no tolerancia a la vinculación de negocios y actividades ilícitas (artículo 6º)

d) Inclusión de entidades ya fiscalizadas por la CMF

En las actividades Fintec de enrutamiento de órdenes se incluyeron a las administradoras generales de fondos, mientras que en las actividades Fintec de asesoría financiera se incluyeron a los bancos, las compañías de seguros y reaseguros (artículo 5º).

También se consideraron a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en actividades Fintec de servicios de plataforma de financiamiento colectivo, enrutamiento de órdenes, intermediación de instrumentos financieros, asesoría crediticia y asesoría de inversión (artículo 46º).

Todas estas entidades son fiscalizadas actualmente por la CMF y cuentan con exigencias a través de las leyes que las regulan para dar cumplimiento a los requisitos de patrimonio y garantías necesarias para poder realizar actividades Fintec sin necesidad de tener que registrarse especialmente en el Registro que establece el proyecto de ley.

Esto es adecuado para el objetivo de la iniciativa en cuanto a impulsar la innovación y competencia del mercado financiero.

e) Facilitación del cumplimiento de requisitos para realizar actividades Fintec

El proyecto consideraba inicialmente un proceso de registro para realizar actividades Fintec, seguido de un proceso de autorización por parte de la CMF para ello. Se consideró que esto podría darse en un solo paso cuando las entidades junto con solicitar su registro presentaran la solicitud de autorización, facilitando también el trabajo de la propia CMF (artículo 7º)

Asimismo, se estableció que requisitos referidos a garantías y patrimonio mínimo que se requieran a las entidades para realizar actividades Fintec no serían acumulativos cuando quisieran prestar dos o más de dichas actividades, favoreciendo con ello a las entidades más pequeñas y, por tanto, la competencia en el mercado financiero (artículo 7º)

f) Carácter público de los registros

Se establece el carácter público de los registros de Proveedores de Información (artículo 19º) y de Proveedores de Iniciación de Pago (artículo 20º), favoreciendo con ello la transparencia y el acceso a información de los participantes del sistema de finanzas abiertas, tanto empresas como los mismos clientes.

g) Mantenimiento temporal de recursos de los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos

Se estableció que los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos podrán mantener transitoriamente los recursos que les entreguen los clientes para concretar un pago, con un plazo máximo de 72 horas, y sujeto a que dichos proveedores cumplan las normas que para ello establezca el Banco Central (artículo 20º).

Esta medida fue largamente discutida, llegando a la conclusión que debía llegarse a un equilibrio entre la facilitación de los procesos, permitiendo que los proveedores de estos servicios pudieran organizar de manera más eficiente la intermediación de transferencias de los recursos entre los clientes y las empresas, por una parte, pero sin generar espacios para que se pudieran dar usos distintos a los recursos que manejaran los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos.

Así se determinó que se podía establecer un plazo breve en que dichas entidades pudieran mantener los pagos de los clientes, pero bajo las reglas que para ello establezca el Banco Central en cuanto a solvencia, liquidez, plazo máximo de pago y gestión de riesgos, entre otros.

h) Criterios para la definición de costos reembolsables del sistema de finanzas abiertas

Dentro de los criterios para definir los costos reembolsables por el uso del sistema de finanzas abiertas por parte de las entidades participantes, el proyecto establecía originalmente que se tuvieran en consideración la naturaleza jurídica y el tamaño de la institución proveedora de la información (artículo 25º), lo cual fue debatido por la Comisión al considerar que dichos criterios podían provocar distorsiones en el sistema de cobros de operación. Se reemplazó dicho criterio por el de la consideración a los costos incrementales de las interfaces, lo que daba mayor certeza y proporcionalidad al mecanismo de cobro.

i) Obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos

El Ejecutivo propuso una norma para establecer la obligación de las Fintec de informar transacciones y saldos de los clientes al Servicio de Impuestos Internos con fines de aplicación de las leyes tributarias, como Impuesto a la Renta, Impuesto Adicional, Impuesto al Valor Agregado y/o Impuesto de Timbres y Estampillas, entre otros (artículo 8º).

La propuesta original fue muy debatida ya que generaba dudas respecto a los alcances que tendría ya que era muy amplia y poco precisa, dando lugar a conflictos con derechos

de los contribuyentes, duplicación de información, inclusión de datos irrelevantes o poco precisos, etcétera.

Entendiendo la necesidad de proteger el interés fiscal y disminuir los espacios de evasión tributaria, así como de reconocer nuevos sistemas de negocios que operan en el mercado financiero -como son los activos financieros virtuales o criptoactivos-, se realizó una extensa discusión respecto a la mejor forma de considerar esta materia, llegándose a una redacción que permitió establecer una obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos por parte de las Fintec más razonable, acotada y pertinente a los objetivos buscados.

j) Antigüedad de la información

El proyecto original no establecía un plazo de antigüedad máxima de la información disponible de ser consultada a través del sistema de finanzas abiertas.

A partir de una indicación presentada por el senador Pugh se discutió este tema, analizando su propuesta de fijarla en un plazo máximo de 180 días de antigüedad, el que fue considerado muy corto por parte de las autoridades de la CMF y el Ejecutivo. Finalmente se estableció en un plazo de 5 años de antigüedad, en consideración al criterio que se da en el mercado financiero tradicional, así como a la definición que se está haciendo en esta materia en el proyecto de ley de deuda consolidada.

Cabe destacar que esta fue la única materia que no logró la unanimidad de la Comisión de Hacienda en su votación, pero que ello estuvo dado también, más que por el plazo, por que esta norma considera la información respecto al historial de transacciones de las personas, lo cual puede dar lugar a que se entreguen datos sensibles o información delicada dentro de dicho historial.

Este fue un punto de larga discusión, pues se consideraba que entregar el detalle de las transacciones en el historial podía permitir que las entidades pudieran usar esa información para perfilar los gustos, preferencias o necesidades de los clientes, o relevar información respecto a su estado de salud u otras materias que no se pueden considerar propias de la información financiera de las personas.

Si bien este punto finalmente no fue zanjado en el debate de la Comisión, y por ello la votación dividida, los cambios en materia de tratamiento de datos que se detallan a continuación en la letra k), al menos reducen los riesgos asociados a este tema.

En cuanto al plazo, se considera que 5 años máximo de antigüedad es correcto, pues se condice con los fines de incentivar la competencia en el mercado financiero y el acceso a servicios financieros por parte de las personas y empresas. Además, es consistente con el hecho de que en el sistema de finanzas abiertas son las personas las dueñas de la información, por lo que son ellas las que deberán autorizar, a través de su consentimiento, hasta que plazo permitirán compartir su información.

k) Tratamiento de datos

Este fue uno de los aspectos más controvertidos en el debate del proyecto, habida cuenta de que el tratamiento de datos es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento del sistema de finanzas abiertas, pero requiere especiales consideraciones respecto de los datos personales y los datos sensibles y la propiedad de las personas sobre ellos, la forma y expresión del consentimiento de los clientes a abrir dichos datos, los procesos de intercambio de dicha información y las responsabilidades derivadas de ello.

Dentro de las modificaciones hechas al proyecto para robustecer el tratamiento de datos necesarios para el funcionamiento del sistema de finanzas abiertas y la protección de las personas se destacan los siguientes cambios:

- Inclusión como un principio de la ley el adecuado resguardo de los datos tratados (artículo 1º)
- No se podrá aplicar el principio de proporcionalidad jurídica a las normas y requisitos de esta ley al tratamiento de datos.
Es decir, las exigencias en materia de protección, resguardo, seguridad e intercambio de datos deben ser los mismos para todas las entidades, sin distinguir en su aplicación según el tamaño, naturaleza de ellas, o por el criterio de proporcionalidad basada en riesgos (artículo 4º)
- Se incluye específicamente la referencia a datos sensibles en la prevención de riesgos en el tratamiento de datos (artículo 21º)
- Se precisó la norma relativa al consentimiento que deben dar los clientes para el intercambio de sus datos, dándole mayor robustez y seguridad (artículo 23º)
- Se estableció la prohibición de inscripción y de participar como Proveedores de Servicios basados en Información a las entidades que cometan infracciones gravísimas y reiteradas en un periodo de 24 meses a las obligaciones legales en materia de protección de datos personales (artículos 19º y 20º).

Mientras la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada no defina un catálogo de tales infracciones gravísimas, se aplicarán aquellas definidas en el artículo 9º transitorio de esta ley.

Con esto, se da una señal más clara respecto a la protección de datos que no estaba contenida en el proyecto de ley y que fue considerada a partir de las

indicaciones presentadas por la senadora Rincón y el senador Pugh y por el senador Coloma para hacerse cargo de este punto.

- Se agregó una norma para que se deje constancia de los requerimientos de información que se realicen a través del sistema de finanzas abiertas, de modo que quede un registro de la individualización de quién requiere una información, el motivo y propósito del requerimiento, el tipo de datos que se requieren y la fecha del requerimiento (artículo 21º).

Con ello se permitirá dar un mejor resguardo a los intercambios de información y constatar la concordancia entre lo que las personas autorizan compartir mediante su consentimiento expreso y lo que se solicita entregar.

I) Aumento de la dotación de personal de la Comisión para el Mercado Financiero

Se establece el aumento de dotación de personal de la CMF en 17 cupos, lo que ha sido solicitado por la propia entidad como un punto de partida para poder hacerse cargo de la implementación y ejecución de las nuevas responsabilidades y funciones que se le entregan a través de esta ley (artículo 8º transitorio)

I.5 COMENTARIOS FINALES

En definitiva, el trabajo de la Comisión de Hacienda logró perfeccionar un proyecto que venía bastante bien trabajado desde sus orígenes, pero requería profundizar ciertas materias, especialmente vinculadas al tratamiento de los datos, para darle mayor solidez a un sistema que debiera beneficiar a muchas personas para ser incluidas en el mercado de finanzas y lograr mejores oportunidades de desarrollo, emprendimiento y seguridad financiera a futuro.

Por lo anterior, es que esta iniciativa también considera desafíos institucionales importantes para el éxito de su aplicación y el fortalecimiento permanente del que deberá ser objeto para estar al día con las innovaciones tecnológicas que se irán dando.

Asimismo, si bien se consideraron criterios de protección de datos personales y de ciberseguridad dentro de la iniciativa, para resguardar la seguridad de las personas y las empresas y delimitar las responsabilidades, la tramitación de las leyes que tratan estas materias de manera global y considerando estructuras institucionales nacionales específicas serán fundamentales para dar mayor fuerza y certeza al futuro de esta regulación.